



¿ES POSIBLE LEGISLAR SOBRE CUESTIONES ÉTICAS?

Victor Federico Dios Otin

fede@isc.upc.edu

Profesor Titular del Dept. de Teoría de la Señal y Comunicaciones
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

RESUMEN

La legitimidad del Estado para legislar sobre conductas consideradas no-éticas (sea desde el punto de vista de la razonabilidad práctica o, al menos, desde la óptica de la mayoría de los ciudadanos) cuando se circunscriben al ámbito privado, es un problema recurrente dentro de la teoría política. En cierta medida podríamos afirmar que está en el núcleo de todos los debates parlamentarios y sociales importantes que surgen periódicamente en el seno de las sociedades occidentales. En este artículo, sin ánimo de tratar todas las derivaciones posibles, que son muy numerosas, se expone parte del recorrido histórico de esta cuestión y algunas de sus implicaciones actuales.

¿ES POSIBLE LEGISLAR SOBRE CUESTIONES ÉTICAS?

Si nos referimos exclusivamente al *harmless wrongdoing* - que ha sido tratado extensivamente en la literatura política anglosajona - esto es, a aquellos actos que no conllevan un daño aparente para los demás ciudadanos, el liberalismo moderno más ortodoxo afirma que no: tal legislación estaría fuera de lugar. Uno de los actuales máximos representantes de la doctrina liberal, John Rawls, en la clásica obra '*A theory of justice*' [1] opina que la legislación ha de contener una mínima base común de principios éticos, un *overlapping consensus*, capaz de satisfacer a todos los grupos sociales, políticos o religiosos con, quizá, serias divergencias en sus respectivas filosofías de vida. El modo en que Rawls construye su paradigma de sociedad es el siguiente: imagina que en un estadio original, presocial, se reúnen todos los partícipes de la futura sociedad, pero detrás de lo que él denomina

el velo de ignorancia, esto es: sin saber a priori cuáles serán las posturas que cada uno defenderá en la sociedad ya formada. En esa situación, opina Rawls, *sería forzoso llegar a un acuerdo de mínimos, de modo que nadie pudiera después sentirse incómodo en su papel definitivo*. La posición de Rawls ha sido criticada desde diferentes presupuestos, pero tiene el mérito de haber sido el primero en tratar de fundar racionalmente un orden ético social desde el liberalismo moderno. A la hora de la práctica, sin embargo, se presentan escollos de difícil solución, y surgen discusiones sobre determinados puntos que para unos son claros - deberían formar parte de aquel *overlapping consensus* - y para otros no. Tal es el caso, por ejemplo, del aborto. A Rawls le parece evidente que nadie debería tener dificultades en admitir la legalidad del aborto dentro de los tres primeros meses de vida del feto, por lo que sobre ese particular debería haber consenso. Sabido es, sin embargo, que tal consenso no existe.

En las mismas filas liberales han surgido corrientes críticas con el enfoque rawlsiano, y opinan que el legislador no podrá sustraerse a la influencia moralizante o 'amoralizante' de las leyes, por lo que ha de procurar en todos los casos crear un ambiente propicio para 'hacer mejores' a los ciudadanos. Tal es la postura, por ejemplo, de Joseph Raz, uno de los más firmes exponentes de esta corriente [2]. No sería prudente, en su opinión, conformarse con una moral de mínimos, sino que la sociedad en su conjunto y el poder político muy especialmente, deben aspirar positivamente a un enriquecimiento ético progresivo de los miembros de la sociedad.

La postura de Raz, y de otros pensadores actuales, enlaza con el pensamiento clásico, si bien

existen siempre matices diferenciados propios de cada escuela. Hagamos un pequeño repaso histórico de esta cuestión, que desde siempre ha estado en el núcleo de la teoría política. No pretendo que sea un examen riguroso, porque se necesitarían muchísimas páginas para hacerlo. Nos conformaremos con recordar las posiciones más representativas que se han sucedido a lo largo de la historia.

La postura de Aristóteles, expresada en su *Ética a Nicómaco* y en su *Política*, debe entenderse desde la peculiar concepción de la sociedad o, mejor, de la *polis*, propia de la Grecia clásica. Siendo el hombre un animal social por antonomasia, éste no puede esperar alcanzar su perfección como persona sino a través de la convivencia organizada propia de una comunidad. Para el pensador griego, por otra parte, la familia es una célula demasiado pequeña, y un país, o lo que sería equivalente a una confederación de ciudades, resulta ya demasiado grande para que los ciudadanos puedan aspirar a ejercer con sabiduría, prudencia y conocimiento de causa, un papel dirigente, quizá limitado, pero decisivo en su particular ámbito. Sin la posibilidad de jugar tal papel, el hombre no podrá desarrollar sus potencialidades. Desde esta perspectiva se adivina que Aristóteles ve la organización política como la cima de la ética, de aquel conocimiento y actitud moral que llevará al hombre a una vida plena o, en sus propias palabras, a una vida lograda. Como conclusión *"es evidente que ha de preocuparse por la virtud la que de verdad se llama (a sí misma) ciudad... Pues, en otro caso, ... la ley se convierte en un pacto que es garante de los derechos mutuos, pero que es incapaz de hacer buenos y justos a los ciudadanos"*. Mas adelante insiste: *"... la comunidad política tiene por objeto las buenas acciones y no únicamente la vida en común"* [3].

En el pensamiento posterior de la tradición cristiana no se espera, sin embargo, que sea la comunidad política la que haya de contribuir decisivamente al perfeccionamiento de los ciudadanos. La persona humana tiene una naturaleza social, pero la adquisición de la virtud es un empeño personal más que comunitario y, en cualquier caso, las iniciativas formativas no han de esperarse del poder político. Tomás de Aquino afirma en esa línea

que las leyes humanas no pretenden prohibir todas las acciones contrarias a la virtud *"sino tan sólo las más graves, aquellas que pueden ser evitadas por la mayoría de las personas y, sobre todo, las que van en perjuicio de los demás, sin cuya prohibición la propia sociedad humana no podría subsistir"* [4]. Es cierto, sin embargo, que Tomás de Aquino asigna un papel importante a las leyes en cuanto a la formación ética de los ciudadanos. Las leyes no pueden evitar todos los comportamientos no virtuosos, pero tampoco pueden alentarlos.

En la línea del empirismo y del racionalismo, presentes en el pensamiento occidental a partir del siglo XVI, la postura de Thomas Hobbes es indudablemente más dura. Hobbes no se plantea ni siquiera la cuestión de cómo legislar sobre las cuestiones éticas de mayor dificultad, puesto que su idea de la naturaleza humana es bastante más negativa y no le permite remontarse a esas sutilezas. Para él, las leyes tienen suficiente trabajo con impedir, en cualquier ámbito de la convivencia social, la prevalencia del más fuerte. No en vano Hobbes no ve tampoco con demasiado optimismo la asamblea democrática, demasiado fácil de manipular en su provecho por un grupo de hombres decididos y sin escrúpulos.

Los padres del liberalismo clásico, como John Stuart Mill o Benjamin Constant, tienen en su punto de mira la defensa de los derechos del individuo frente a las pretensiones omnímodas de un poder estatal de signo absolutista, que tiende a absorber todos los focos de decisión. Sin duda, como muestran en sus numerosos escritos, están preocupados por el bien común y el imperio de la virtud, pero es mayor su temor a las injerencias ilegítimas del Estado. Afirma Mill: *"La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido contra un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él, porque le haría más feliz, o porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo"* [5].

A propósito del Informe Wolfenden, remitido en 1957 al Parlamento británico, se desató un largo debate acerca del legítimo alcance de la ley sobre las acciones consideradas inmorales cuando éstas se circunscriben a un ámbito no público. Patrick Devlin opinó que no habría de cerrarse por principio la posibilidad de actuación legal en esos casos, siquiera sea para evitar un peligro de pérdida de la cohesión social, en cuyo fundamento juegan un papel muy importante los sentimientos éticos de la mayoría de la población [6]. Alrededor de esta opinión se sucedieron durante años críticas y matizaciones, que sería largo detallar aquí.

En la actualidad es claro que el debate sobre si puede o no legislarse sobre cuestiones éticas, o hasta qué punto puede hacerse legítimamente, continúa abierto.

Por mi parte, he de confesarlo, estoy más cerca de la posición de John Neuhaus, de tendencia conservadora. Neuhaus sostiene que es una ingenuidad pretender mantener la acción política apartada de implicaciones éticas, ya que, al final, es sobre cuestiones éticas de fondo sobre lo que se está decidiendo cuando se promulgan leyes, en uno o en otro sentido. El problema, según Neuhaus, no es si se debe legislar o no sobre cuestiones éticas, sino cómo debe legislarse.

Es claro, y en esto coinciden prácticamente todas las filosofías políticas, que deben separarse cuidadosamente las cuestiones que tienen, o tendrán a la larga, una inevitable repercusión pública de aquellas que quedan en la esfera privada de los ciudadanos. El legislador debería preocuparse por las posibles actitudes amorales o inmorales de los ciudadanos cuando éstas conllevan siempre, o con alta probabilidad, consecuencias negativas para otros miembros de la sociedad. Por poner algunos ejemplos: el que un hombre tenga la costumbre de emborracharse los fines de semana en su casa, o en la de algún amigo o en el bar, puede tener consecuencias o no. Es sabido que, a la larga, de esa costumbre se derivarán efectos negativos en el que la practica, como que se convierta en un alcohólico o que desarrolle alguna grave enfermedad, hepática o psíquica. Sin embargo no es prudente, ni posible en la práctica, que el Estado

se inmiscuya en ese tipo de conductas privadas. La situación, sin embargo, adquiere otra dimensión cuando se comprueba que el consumo inmoderado de alcohol es causa de un elevado tanto por ciento de los accidentes de tráfico. Ciertamente el Estado sigue sin poder, razonablemente, inmiscuirse en la conducta privada, pero prohibirá la conducción de vehículos en determinadas condiciones, por el riesgo que supone para los demás y para uno mismo. En esta misma línea, el Estado no entrará en el asunto de las borracheras 'tranquilas' mientras quienes se emborrachen sean personas adultas, pero si observa que esas desafortunadas costumbres se introducen de forma generalizada entre la gente joven, entonces se ve obligado a ejercer un papel 'paternalista', a fin de evitar que numerosos jóvenes ciudadanos adquieran el vicio del excesivo consumo de alcohol desde edades tempranas. Es indudable que el Estado actuará con buen criterio cuando ponga trabas legales para dificultar esas costumbres, de acuerdo, sin duda, a criterios éticos bien fundados.

La existencia de principios éticos básicos, subyacentes a toda acción política, es una evidencia. Ocurre que nos hemos acostumbrado de tal manera a respetar determinados principios que nos parecen simplemente de sentido común. Por otra parte, la función formativa de las leyes es también clara. Veamos algunos ejemplos, aunque podrían aducirse muchos más. La política fiscal tiene como primera misión, no alimentar las arcas del Estado, sino la de contribuir a limar diferencias de renta entre ciudadanos y entre regiones geográficas, porque se entiende que unas excesivas diferencias de disponibilidad económica no son acordes con la igual dignidad de todas las personas. Cuando los hombres nacen y se forman en una sociedad en la que se aplican de forma natural esos principios de solidaridad, acaban formando parte de la propia manera de pensar. En la misma línea del ejemplo anterior: a la propiedad privada no se le concede en la sociedad occidental, un valor inatacable de pleno derecho, sino que se considera que toda propiedad privada tiene una función social. Actualmente se estudia en nuestro país la posibilidad, de grabar con fuertes impuestos a quienes tienen pisos desocupados, para que los pongan a disposición de los demás ciudadanos, sea en forma de venta o de alquiler. Esa política en particular se aplica ya en

otros países desarrollados. Los clásicos derechos de paso o el derecho de usucapión - el hacerse con la propiedad pacífica de un bien no reclamado y que se lleva años utilizando - que proceden del derecho romano, abogan también por un empleo racional y justo de los bienes.

Hoy en día el asunto que tenemos planteado sobre la mesa es el futuro de la familia, a raíz de los profundos cambios que desde algunos sectores pretenden introducirse. Parece evidente que no es un tema menor. En este particular sigue siendo razonable mantener que no es el Estado quien ha de dictar a cada cuál cómo ha de enfocar su vida o sus relaciones personales, pero también es cierto que la defensa del bien común le obligara a matizar muy bien las disposiciones legales, ya que no le es posible encontrar una posición de hipotética neutralidad. El aspecto que el legislador debería tener muy en cuenta es el mensaje que desde el corpus legislativo se está mandando a los ciudadanos. Si las leyes protegen a la familia, en su acepción clásica, los ciudadanos seguirán comprendiendo mayoritariamente su importancia y la necesidad que existe de mantener sus estatus diferencial, frente a otros tipos de uniones estables que no cumplen la misma función social. Por el contrario, si las leyes tratan por igual todas las uniones estables, los ciudadanos, dentro de quizá no muchos años, acabarán por considerar que la familia hoy día considerada normal, no tiene mayor relevancia que aquellas otras uniones.

En los países occidentales tenemos ya conocimiento de algunas de las consecuencias que se derivan de la disolución del núcleo familiar, debido al hasta ahora creciente número de divorcios. La Unión Europea ha hecho públicos, por ejemplo, los datos relativos al índice de pobreza, mostrando que tienen más posibilidad de caer bajo el umbral de pobreza los hogares monoparentales [7]. Más preocupantes son los datos referentes al crecimiento de la violencia juvenil: es un dato estadístico que el índice de violencia juvenil entre los chicos aumenta cuando les falta un adecuado referente masculino [8].

En este tema, como en tantos otros, no es posible sustraerse a consideraciones éticas. Sin duda el legislador que pretende equiparar legalmente

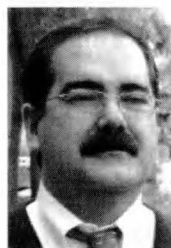
cualquier tipo de unión estable está ejerciendo una opción libre de elección entre dos concepciones éticas divergentes.

Si investigamos más hacia el fondo de las diferentes actitudes se advierte la ya clásica pugna entre la postura ultraliberal y las posiciones de la tradición ética de raíz judeo-cristiana. Para la primera el bien supremo es la libertad de elección, para la segunda lo prioritario son los bienes genuinos del hombre, razonablemente considerados como tales. Para los liberales el hecho de poder elegir es un bien en sí mismo, para los segundos se trata no tanto de elegir sino de acertar en esa elección. Pero estas consideraciones nos llevarían ya muy lejos.

REFERENCIAS

- [1] John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.
- [2] Joseph Raz, *A Morality of Freedom*, Clarendon Press, 1986.
- [3] Aristóteles, *Política*, libro III, cap. 9.
- [4] Tomás de Aquino, *Summa Theologica* I-II, q. 96, a. 2
- [5] John Stuart Mill, *On Liberty* (1859), Penguin Books, 1958.
- [6] Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals*, Oxford University Press, 1965.
- [7] El 'riesgo persistente de pobreza' es de un 15% para la Europa de los quince. A la cola, por países, están Irlanda, Grecia y Portugal, con un riesgo que se sitúa entre el 20% y el 21%. Por tipos de familia, las mujeres u hombres solos, con uno o más hijos a su cargo, alcanzan un índice del 35%, según Eurostat.
- [8] María Victoria Barrio y Kathleen Heide, en el debate *Violencia y juventud*, VIII Reunión Internacional sobre Biología y Sociología de la violencia. Valencia, 2004.

AUTOR



Federico Dios Otin es profesor titular del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Imparte las asignaturas de Campos Electromagnéticos y de Ingeniería de Sistemas Ópticos. Sus campos de interés científicos son la influencia de la turbulencia atmosférica en la propagación de ondas luminosas y los sistemas de medida mediante láser. En su faceta como pensador ha publicado recientemente el libro "Mi querido agnóstico", Descleé de Brouwer, 2004.